

# EL VACÍO POLÍTICO

Francisco Arellano • Sebastián Aylwin



## RESUMEN:

Los casos de corrupción del sistema político y, en términos genéricos, el vínculo entre política y dinero, profundizan la situación de vacío político en la que se encuentra el país. La derecha es la más directamente afectada con el caso Penta, sin embargo, alcanza a la coalición oficialista e incluso a la Presidenta Bachelet con el caso Caval-Dávalos, creando un marasmo en el gobierno. Especial atención tiene la notable disminución en la credibilidad de Bachelet, quien hasta entonces oficiaba de único dique de contención de la crisis de legitimidad que afecta a la política. En el plano de los actores sociales, los meses de verano significan una disminución de sus actividades, sin embargo, movimientos en diversos actores nos llaman a prestar atención en la sociedad civil y a estar expectantes de lo que ocurra durante el año. Finalmente, se estudia el reordenamiento empresarial con las elecciones de timonel en la Sofofa y la CPC, a la vez que se presentan hipótesis para estudiar el papel que los tribunales comienzan a cumplir en el contexto político y social actual.

## PALABRAS CLAVE:

- Concertación.
- Reformas.
- Corrupción.
- Actores sociales.
- Legitimidad.

Poco duró la alegría en palacio tras la aprobación de algunos proyectos emblemáticos en la apurada y solitaria cocina de enero. Los primeros meses del 2015 quedarán en la retina de muchos como aquellos en los que se destapó la estrecha relación entre el empresariado y los partidos de la transición. Audaces fiscales, indignos correos electrónicos y vergonzosas declaraciones llenaron las pantallas de televisión y la prensa en los meses del receso veraniego, y tuvieron cautiva -ya sea desde la incredulidad, el estupor, el morbo o el anhelo de justicia- a buena parte de la sociedad chilena, en lo que para muchos fue la primera constatación de un fenómeno profundamente imbricado con el pacto de la transición. Resultó ser que la corrupción era parte constitutiva de la relación entre empresariado y política.

La crisis desatada ha implicado el desplazamiento de varias de las placas tectónicas de las estructuras tradicionales, pero, por sobre todo, ha evidenciado la ausencia de conducción política sobre la sociedad chilena. El golpe que recibe Bachelet, tras la denuncia por los negocios de su hijo, expone en toda su fragilidad lo poco de legitimidad que le queda al sistema de partidos ante el grueso de la población. Ni la caída en picada de la derecha política pareciera ser suficiente para levantar a la Concertación.

Mientras tanto, la sociedad sigue a la espera de las reformas prometidas. La incapacidad política del Gobierno y su nulo interés en empujar reformas sustantivas, han tensionado crecientemente su relación con una serie de organizaciones -algunas vinculadas al Gobierno, otras no- que ya se muestran cada vez más impacientes ante la sensación de que estos serán cuatro años perdidos. Así, se observa cómo el empresariado intenta ajustarse tanto al déficit de legitimidad que lo afecta directamente, como al que afecta a los partidos políticos, y que lo ha obligado a asumir una presencia más explícita en la dirección de la sociedad. Por último, la crisis ha evidenciado crecientemente el papel del Poder Judicial en el Chile neoliberal, destacándose algunos rasgos que no habían sido anotados previamente.

## **I. CRISIS EXISTENCIAL EN LA DERECHA POLÍTICA: DEL RASPADO DE LA OLLA AL RASPADO DE MURALLA**

La derecha chilena enfrenta actualmente una de las mayores crisis políticas de su historia reciente. Luego de regresar a La Moneda por la vía de elecciones democráticas con el gobierno de Sebastián Piñera y de haberse preparado el 2014 para ejercer un activo papel de oposición, el carácter irregular, e incluso constitutivo de delito, del vínculo entre política y dinero tienen sumergida a la derecha en una crisis de sentido y legitimidad que anula su capacidad de actuar políticamente.

La relación entre la UDI y el grupo económico Penta, instalado en la prensa desde hace cinco meses, pero que escaló hasta ser un escándalo desde enero, demostró no sólo ser orgánica -en el sentido de que conformaban un todo y no una arista puntual- sino, además, demostró ser una subordinación del primero al segundo. El financiamiento directo alcanza al presidente del partido, Ernesto Silva; a senadores como Iván Moreira y Ena von Baer; a funcionarios del anterior gobierno, como el ex subsecretario de minería Pablo Wagner; a un miembro del Tribunal Constitucional, Cristián Letelier; y a líderes históricos del partido como Jovino Novoa. Si bien hasta ahora se sabe que fue un financiamiento centrado en las campañas electorales, el caso de Wagner, quien básicamente solicitó ser mantenido económicamente a cambio de influencia -y para lo cual se intentó utilizar la Universidad del Desarrollo<sup>1</sup>-,

---

1 Figueroa, J. y Albert, C. (2015, 16 de enero). Las huellas del grupo Penta en el negocio de la Universidad del Desarrollo. *Ciper*. Recuperado de: <http://ciperchile.cl/2015/01/16/las-huellas-del-grupo-penta-en-el-negocio-de-la-universidad-del-desarrollo/>

muestra que la subordinación es sostenida y constante, al punto de que presumiblemente figuras públicas y liderazgos internos del partido debían su actuar al grupo económico más que a la propia agrupación política.

La renuncia en marzo de Ernesto Silva a la presidencia de la colectividad, anuncia el debilitamiento de una de sus figuras emblemáticas: Jovino Novoa, quien en enero había frenado las presiones de renuncia a Silva encabezadas por el edil de Las Condes, Francisco de la Maza Chadwick. En 2003, Novoa ya había enfrentado un escándalo al ser involucrado en el caso Spiniak, del cual salió indemne y con su liderazgo al interior de la UDI confirmado. Sin embargo, el caso Penta lo sitúa como el ideólogo de este ilegal sistema de financiamiento, por lo cual ha debido comparecer ante tribunales, aunque se haya negado a hacerlo ante la fiscalía, seguramente a la espera de que otros también tengan que hacerlo. En abril se elegirá una nueva directiva tras la renuncia de tres de sus miembros, para lo cual ya se perfilan candidatos como el actual presidente subrogante, Javier Macaya, vinculado a Novoa, el ex ministro Andrés Chadwick, primo y parte del grupo más cercano a Piñera, y, como una eventual carta de consenso, el senador Hernán Larraín, quien contaría con el importante apoyo del grupo de alcaldes del partido. El partido que más creció durante la transición, llegando a disputar seriamente la presidencia a la Concertación en 1999, es también el que más rápidamente se sumerge en las profundidades de la crisis del sistema político que vive el país. Lo que podría deberse a lo expuesto que se encuentra el gremialismo a las disputas empresariales y, en paralelo, lo efectiva que ha sido la Concertación para erigirse como mediador político legítimo y eficaz entre el empresariado pinochetista y el resto de la sociedad, haciendo superfluo el papel de la UDI.

En tanto, en RN han optado por un silencio que si bien lo arrastra en la crisis de su aliado, le permite a sus dirigentes y figuras públicas no aparecer vinculadas al escándalo, concentrándose en su papel de oposición al Gobierno. Lo anterior, con la excepción del senador Manuel José Ossandón, que en una variante con tintes demagógicos -en este y otros asuntos- ha interpelado directamente a los involucrados solicitándoles la renuncia. En paralelo, el ex presidente Piñera ha optado por inmiscuirse lo menos posible en la coyuntura que vive el sector y cultivar así un perfil de “hombre de Estado”, centrando su actividad en cuestiones internacionales como la situación en Venezuela o la demanda de Bolivia en la Haya. Pese a ello, el inmovilismo tendrá un efecto negativo y cómplice en RN, haciendo que las figuras con cierto capital político elijan no aparecer cerca de la agrupación, acrecentando la diáspora del sector.

En este contexto, el futuro de la derecha es incierto. Los nuevos referentes, como Evópoli y Amplitud, no han logrado emerger como alternativas reales y renovadas, quedando subordinadas a instrumentos de la derecha tradicional, como en el caso de Amplitud a la sombra del liderazgo de Piñera, o empantanadas en la crisis del sector, como ocurre con Evópoli y una de sus principales figuras, Felipe Kast, que vinculado al financiamiento de Penta y con más de \$200 millones en aportes reservados, queda atrapado en el mismo marasmo de la UDI. No obstante, en una inédita demostración de falta de sentido de oportunidad, RN, la UDI, Evópoli y el Partido Regionalista de los Independientes (PRI) anunciaron a fines de enero, en medio de la crisis del sector, y sin ningún cambio visible en su discurso o estrategia, la conformación de un nuevo bloque político, del cual se desconoce toda actividad o nombre de fantasía con el cual identificarlo, salvo un documento firmado por los presidentes y secretarios generales de la colectividades -de escuetas tres páginas- que

hace como declaración de principios<sup>2</sup>. Resaltan en este bloque la ausencia del movimiento Amplitud y, en marzo, la mayor distancia que deciden tomar RN, Evópoli y el PRI respecto a sus aliados de la UDI. De momento, desde la derecha sólo liderazgos individuales logran emerger con sentido y perfil político, aunque sin proyecto, ya sea recordando la figura del benevolente patrón de fundo en el caso de Ossandón, o del moderno y arriesgado empresario en el caso de Piñera.

Breves se hicieron los cuatro años en que la derecha volvió a La Moneda en dos décadas, y desde hoy podemos decir que fueron insuficientes para dar sentido histórico a un sector político incómodo frente a la administración neoliberal de sus contrincantes de la Concertación y la cada vez mayor distancia que la sociedad chilena toma respecto de la dictadura de Pinochet, a la que indefectiblemente está vinculada la derecha. El Gobierno de Piñera buscó enfrentar ambos desafíos: desvincularse de la dictadura militar y construir un nuevo ideario desde la imagen del empresario.<sup>3</sup> Ninguno de estos objetivos logra consolidarse y así la derecha enfrenta los casos de corrupción sin más haber que un pobre desempeño como oposición durante el 2014 -caracterizada por la intransigencia en el discurso y la transigencia en la práctica, sin que medien principios claramente identificables-, lo que en definitiva significa una profunda crisis de sentido para este sector político.

## **II. SIN DIRECCIÓN: EL MOMENTO MÁS BAJO DE LA CONCERTACIÓN**

El cierre del año político 2014 fue visto por el Gobierno como una oportunidad para retomar control sobre la agenda. Aprovechando el mes de enero, y la ausencia de control ciudadano que produce el verano, se aceleró la tramitación de proyectos claves que pudieran reafirmar el espíritu reformista del Gobierno, conteniendo así la deslegitimación que arrecia sobre el sistema político. En ese marco, y reafirmando al menos su control burocrático sobre el parlamento, el Gobierno aprobó los proyectos de Ministerio de la Mujer, Acuerdo de Unión Civil y Ley de Inclusión (antes llamado proyecto de fin al lucro, fin a la selección y fin al copago). Si bien las organizaciones que presionaron por los primeros dos proyectos saludaron su aprobación, notorio fue el silencio de las organizaciones tras la votación del primer paquete de la reforma educacional aprobada por el Gobierno: una de las principales promesas de campaña, a la vez que el objetivo que movilizó a miles de estudiantes los años anteriores, no provocó reacción alguna de parte de la sociedad. La negativa de llegar a acuerdo con los sectores organizados de la sociedad que han empujado las reformas, como la posterior jibarización del debate público como modo de eludir las críticas de éstos -ambos señalados en su oportunidad por este medio-, terminaron por desanclar totalmente al malestar social de la reforma del gobierno, volviéndola ineficaz para su principal fin: reconstruir el nexo entre política y sociedad.

A pesar de esto, y aprovechando la debacle de la derecha política, el ejecutivo presentó sus avances legislativos como una consolidación de su posición política. Varios columnistas – Tironi y Cavallo entre otros- se apresuraron a llamar a éste “el gobierno más reformista desde la dictadura” y a ensalzar el éxito y efectividad de la presidenta Bachelet. Difícil era prever los eventos que tendrían en poco más de un mes a los mismos columnistas declarando la crisis del gobierno.

---

<sup>2</sup> Aunque no se encuentra en la página web de los partidos adscritos, el documento “Bases para la construcción de un nuevo gobierno para Chile” se puede ver en: <http://cronicas.cl/wp-content/uploads/2015/01/254105967-BASES-DE-LA-CONSTRUCCION-DE-UN-NUEVO-GOBIERNO-PARA-CHILE-pdf.pdf>

<sup>3</sup> Para más detalles ver Equipo de Investigadores Nodo XXI. (2014, abril). ¿El ocaso de la política de la transición? Balance político del gobierno de Piñera. *Cuadernos de Coyuntura*, (2), pp. 5-16.

El 6 de febrero, un reportaje de Revista Qué Pasa<sup>4</sup> reveló que una empresa de propiedad de la nuera de la Presidenta, Caval Ltda., solicitó un crédito de \$6.500 millones al Banco de Chile, para la compra de un terreno cuyo valor subiría tras el cambio de normativa en uso de suelo. El dato que desató la polémica fue que el crédito fue aprobado en una reunión del hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos, con Andrónico Luksic, vicepresidente -y dueño- del banco. El crédito fue tramitado durante la campaña presidencial, y otorgado el día después de que se conocieron los resultados de la elección. La compra y posterior venta del predio reportó a Caval utilidades por \$2.500 millones, y al banco por \$500 millones. La fiscalía de Rancagua se encuentra investigando un eventual tráfico de influencia y uso de información privilegiada por parte de Caval. La noticia gatilló la renuncia de Dávalos como Director Sociocultural de La Moneda, así como posteriores declaraciones de su madre, quien señaló estar muy afectada por lo ocurrido y que se enteró por la prensa de las actividades de su hijo.

Paralelamente, la investigación del caso Penta evidenció la existencia de pagos de tipo político por la empresa SQM, propiedad de Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, usando boletas ideológicamente falsas. Lo interesante fue que estas boletas implicarían, al parecer, a figuras de la Concertación como Jorge Pizarro (DC), Fulvio Rossi (PS) y Roberto León (DC). Esta situación tuvo todo el mes de marzo al conjunto de instituciones involucradas, Servicio de Impuestos Internos, la Fiscalía e incluso el Tribunal Constitucional, sometidos a profundas presiones para evitar que la información llegue a la opinión pública. A la fecha aún no concluye la investigación, pero ya se dieron a conocer boletas que involucrarían a Libertad y Desarrollo, Imaginación y Fundación Chile 21.

El conjunto de estas polémicas ha agudizado la crisis de legitimidad del sistema político. No se trata de un giro respecto del escenario anterior, pero sí de una profundización de la tendencia ya observada de descrédito y desapego de la sociedad chilena con el sistema de partidos. La figura de la Presidenta, a quien desde el fin de su primer gobierno se le sindicaba como el último gran puente entre ambos mundos, sufre un golpe profundo en su legitimidad. En tanto, los partidos dan señales de desacople del Ejecutivo. Particularmente, en el caso de las elecciones del Partido Socialista, donde la opción de Isabel Allende, cercana al Gobierno, pareciera estar perdiendo terreno ante Camilo Escalona, quien ha recibido el apoyo de diversas figuras relevantes al interior de la colectividad, como José Miguel Insulza, Oscar Guillermo Garretón o Fulvio Rossi. Escalona pareciera convertirse así en la vía de repliegue de disímiles sectores del Partido Socialista, en la medida que cae la popularidad de la Presidenta.

El gobierno, para intentar contener esta crisis, convocó a un “Consejo Asesor contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción”. Encabezado por el ingeniero ligado a la Concertación, Eduardo Engel, el grupo se compone de una amplia gama de expertos, desde figuras ligadas al pinochetismo (Olga Feliú), a la Iglesia (Benito Baranda), al empresariado (Vittorio Corbo y Lucas Sierra), a la derecha (Rossana Costa), a la Concertación (Andrea Repetto, Paulina Veloso, Agustín Squella, Alfredo Etcheberry y el mismo Engel), al Partido Comunista (Manuel Riesco) y al movimiento “Marca AC” (Claudio Fuentes y Marcela Ríos), además de otras ONGs. Los rasgos autoritarios y antidemocráticos del liderazgo de Bachelet, que habían sido apuntados en estas páginas con anterioridad<sup>5</sup>, en particular por su opción

4 Salaberry, J. (2015, 6 de febrero). Un negocio Caval. *Qué Pasa*. Recuperado de: <http://www.quepasa.cl/articulo/actualidad/2015/02/1-16218-9-un-negocio-caval.shtml>

5 Figueroa, F. y Romero, N. (2014, diciembre). La gobernabilidad en tiempos del bacheletismo. *Cuadernos de Coyuntura*, (6), pp. 5-14.



por el silencio y la ambigüedad en vez de afrontar el debate abierto de ideas, alcanza nuevos niveles, al pretender proveer una solución a la conflictiva relación dinero-política excluyendo a los involucrados, y negando así a la política su carácter de espacio abierto de resolución de conflictos. Rápidamente, los partidos de gobierno, cuya marginación fue defendida por el presidente del Consejo, reaccionaron creando su propia comisión para afrontar la crisis y desestimar el espacio convocado por la Presidenta.

En paralelo, el progresismo, encabezado por Marco Enríquez-Ominami y Revolución Democrática, junto a las figuras jóvenes del Partido Comunista, convocaron a una concentración para solicitar un plebiscito por una asamblea constituyente como salida a la crisis de corrupción. Ante la oportunidad, tanto el Partido Socialista como el Partido por la Democracia adhirieron al acto como una manera de escapar de la sensación generalizada de hastío con la política. La escasa convocatoria y el exceso de figuras de la Concertación, hicieron que el acto pasara desapercibido. Pocos días después el ex presidente Ricardo Lagos, lanzó un propuesta con diversos intelectuales de derecha y Concertación, y una plataforma web participativa, con el claro fin de intentar apropiarse de la iniciativa. De este modo, se empieza a construir un acercamiento al tema constituyente como mecanismo de relegitimación del Estado actual, y no de su transformación. Se pone el centro del debate en el mecanismo y no en el contenido de la nueva carta, ni en el carácter social de los actores que debiesen empujarla. Una falsa radicalización, que finalmente elude el problema del Estado subsidiario y su carácter neoliberal y excluyente.

### **III. INQUIETUD EN LA SOCIEDAD**

El vacío político comienza a mostrar sus expresiones en el campo de los sectores sociales subalternos mediante una relajación de los mecanismos de control y disciplinamiento requeridos para gobernar en los marcos de la política neoliberal. Si bien la capacidad de desarticulación del Estado sobre la sociedad sigue operando con una inercia que es suficiente para mantener la eficacia del entramado legal subsidiario, los gremios tradicionales y nuevos movimientos sociales demuestran menor subordinación y lealtad que antaño a la Concertación, incluso con la nueva apuesta de control social que significó la inclusión del PC en el pacto Nueva Mayoría. La elaboración de políticas públicas y reformas, cada vez más colonizadas por la acción de la clase empresarial, es vestida con el viejo traje de consenso político y discurso tecnocrático, que a su vez cada día blindo menos la acción gubernamental de actores sociales que presionan por ser parte de la construcción estatal, anatema esto último para el Estado Subsidiario.

En este contexto, el papel del PC en el gobierno se ve directamente expuesto en al menos dos frentes estratégicos para el gobierno: la reforma educacional y la laboral. En el primero, la elaboración de un proyecto de Carrera Docente debía ser una discusión compleja por el rol que jugaría la derecha, pero complicada ésta con los casos de corrupción sorprende la dificultad que ha tenido el gobierno para siquiera presentar su reforma. Primero se dijo que se presentaría en diciembre, luego se aplazó para enero, ya en dicho mes se habló de marzo y ahora de abril. La dificultad principal proviene del propio Colegio de Profesores, liderado por el PC, pero cuya disidencia interna le ha obligado a sostener una ambigua postura crítica y colaborativa, presionando por demandas históricas del gremio, las que han copado la tramitación legislativa de proyectos como el paso a planta de profesores y el mejoramiento de condiciones de jubilación. Sin embargo, nada asegura que aquello haya

apaciguado las desconfianzas del magisterio a lo que salga de las oficinas del Mineduc en lo relativo a Carrera Docente<sup>6</sup>.

Algo similar ocurre con el proyecto de fortalecimiento de la educación pública o desmunicipalización<sup>7</sup>. La iniciativa ha encontrado la resistencia de la Asociación Chilena de Municipalidades, entidad que agrupa exclusivamente a los ediles de la Concertación y es presidida por el alcalde de Maipú y militante DC Christian Vittori. La crítica de estos se ha centrado en lo que parece ser exclusivamente una preocupación gremial: la disminución de los presupuestos municipales que implica el desprendimiento de la administración de las escuelas fiscales. Sin embargo, otro debate se ha desprendido de aquél, relativo a si se trata de una modificación meramente administrativa o una reestructuración de la educación pública, lo segundo atado a la discusión sobre el financiamiento de la educación fiscal y el principio de neutralidad sostenido hasta ahora entre educación particular subvencionada y municipal.

En el ámbito del trabajo, el PC ha logrado mantener una postura de apoyo al gobierno por parte de la CUT frente a la Reforma Laboral. Destacan igualmente la voz disidente de los vicepresidentes de la entidad, el DC Nolberto Díaz y el PS Arturo Martínez, diversos sindicatos de la central e intelectuales vinculados al mundo laboral. Esta tensión, que tiene nuevamente en el centro a dirigentes comunistas, parece mezclar elementos oportunistas, como la posición jugada por Martínez y un descontento genuino en las bases sindicales ante una estrategia de contención por parte del PC, y de retrocesos legales y cesiones al empresariado por parte de los ministerios del Trabajo y Hacienda.

Movimientos sociales no tradicionales, pero no por ello menos expuestos a la cooptación gubernamental y al clientelismo político, como los movimientos feminista y ambientalista, también muestran ciertas señales de rebeldía. Se enmarca en esto la oposición al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo durante enero, por parte del movimiento ambiental, sindicando directamente a la Presidenta Bachelet de privilegiar al proyecto del Grupo Luksic, y la manifestación de movimientos feministas en marzo, conmemorando el día de la mujer y advirtiendo al gobierno sobre la despreocupación que parece mostrar frente al evidente descuadre de la Concertación por el proyecto de ley de aborto, en particular, la causal que se refiere a los casos de violación.

Este escenario de inquietud social se produce en los meses comúnmente de mayor inactividad ciudadana en el foro público. Habrá que ver cómo se comporta durante el año en lo que se refiere a movilizaciones y la expresión del malestar social. Lo anterior, considerando además la ausencia del actor con mayor capacidad de movilización en el Chile actual: los estudiantes, que producto de las características propias de su actividad disminuye considerablemente la intensidad de su activismo durante el verano. No obstante, podemos señalar que, en la misma dirección de lo observado arriba, se dio la renovación de federaciones de estudiantes que componen la Confech, mediante elecciones democráticas que en su mayoría ocurren durante los meses de noviembre y diciembre. El proceso consolida la tendencia de retroceso de las fuerzas vinculadas al gobierno, en particular las Juventudes Comunistas, que disminuyen su presencia de cinco a dos federaciones, y el fortalecimiento de fuerzas de izquierda social, independientes, en particular de la alianza de izquierda conformada por organizaciones nacionales como el Frente de Estudiantes Libertarios, la Unión Nacional Estudiantil y la

6 Orellana, V. (2014, diciembre). La reforma de Eyzaguirre y la profesión docente: ¿continuidad o cambio?. *Cuadernos de Coyuntura*, (6), pp. 27-37.

7 Una revisión detallada de ésta puede revisarse en el artículo de Cultura de este cuaderno.

Izquierda Autónoma, que concentran en total 15 federaciones a la fecha, erigiéndose como la alianza mayoritaria de la confederación.

Lo descrito indica un movimiento lento e inorgánico pero sostenido de tránsito en organizaciones sociales tradicionalmente lideradas por los partidos tradicionales -con especial preponderancia del PC, el PS y, en menor medida, la DC-, hacia nuevos referentes sociales o embriones políticos, con mayor independencia del sistema político y del poder económico. Aún queda pendiente que dichas organizaciones demuestren su capacidad de articularse entre ellas, y logren encabezar procesos que representen transversalmente la sociedad y no meramente una buena gestión gremial, lo que sin duda avanza en paralelo al desarrollo de la crisis política y sus posibles salidas.

#### **IV. REORDENAMIENTO EMPRESARIAL**

En marzo se realizaron las elecciones de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC). Como suele ser su costumbre, el nuevo presidente resultó del consenso de las seis ramas que conforman la CPC y no de la competencia democrática de candidatos. El nuevo mandamás del empresariado será el actual presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Alberto Salas. En su elección habrían pesado sus redes hacia la Concertación y, en particular, con Bachelet, así como también el respaldo de la gran minería multinacional y del Grupo Luksic. Es decir, colocar un liderazgo capaz de negociar las reformas. No obstante lo anterior, el grado de colonización empresarial sobre una política en creciente descomposición hace pensar, más bien, que el empresariado apuesta a una ofensiva que seguirá maximizando su poder sobre la institucionalidad política.

A contrapelo de la tradición antidemocrática de los gremios empresariales, la Sofofa tendrá la elección más reñida desde el 2001, cuando se impuso Juan Claro. En esta oportunidad se enfrentarán el actual presidente Von Mühlenbrock contra el empresario Andrés Navarro. El primero, ha sido líder histórico de los industriales (ex gerente de la acerera Gerdau Aza) y ha defendido una línea de “tolerancia cero” a las reformas, a niveles que han puesto en duda la capacidad del empresariado de liderar la modernización neoliberal. De hecho, sus intervenciones han sido duramente criticadas por franjas del empresariado que abogan por una conducción más consciente de las transformaciones ocurridas en los últimos años y de los “excesos” del empresariado, cuyos mecanismos de acumulación han sido cuestionados por la sociedad pero también por los inversores internacionales. El segundo, es un empresario vinculado al sector informático –no sería un genuino industrial, reclaman sus detractores-, vinculado también a las redes concertacionistas –votó por el No y es cercano a la DC- y también es cercano a Piñera; ha defendido la necesidad de “abrir la Sofofa a la sociedad”, es decir, apunta a que la propia gremial lidere una renovación empresarial más acorde a los tiempos que corren. En términos de apoyo, el primero ha recibido el apoyo cerrado de los grandes grupos empresariales –Angelini, Luksic, Paulmann, Sigdo Koppers y Said), en tanto que el segundo es apoyado por Swett, Bernardo Larraín Matte y Pablo Bosch. En definitiva, si bien no está en juego ningún reacomodo sustantivo del empresariado en esta elección, los resultados de la Sofofa darán cuenta del grado de sintonía que una mayoría del empresariado industrial tiene con los cambios que ha vivido la sociedad chilena y cómo este se readecua a las nuevas condiciones.



## **V. EL INESPERADO ROL DEL PODER JUDICIAL**

Entre los episodios de mayor interés estos meses, y que pasó plenamente desapercibido por la prensa, estuvo el conflicto de la comunidad de Caimanes con la minera Los Pelambres, de propiedad del Grupo Luksic. Los Pelambres construyó un tranque de relaves -es decir, una gigantesca piscina de desechos tóxicos y subproductos del proceso minero- en las cercanías de Caimanes, contaminando las fuentes de agua a las que accede el pueblo. Éste presentó un recurso de protección, y la Corte Suprema dictaminó que el tranque debía ser removido. Sin embargo, la empresa se ha negado a hacerlo a pesar de las protestas de los vecinos que fueron reprimidos por Fuerzas Especiales. Tras 75 días de movilizaciones y corte de ruta, el gobierno y la empresa estuvieron dispuestos a dialogar con la comunidad. En reiteradas ocasiones, los voceros de la comunidad acusaron la colusión entre el gobierno y Luksic en este caso, llegando a señalar que vieron a Fuerzas Especiales utilizando los comedores de la minera del empresario.

Este episodio, además de relevar una vez más la profunda imbricación de intereses y acciones entre la Concertación y el Grupo Luksic, resalta cierta tendencia observable en el actuar del Poder Judicial en los últimos años, y cuya visibilidad se ha acrecentado con las investigaciones por corrupción. Se trata de una serie de conflictos en los cuales se percibe una cierta independencia frente a los intereses empresariales de parte del Poder Judicial, particularmente en comparación con sus pares Legislativo y Ejecutivo. Así, la situación que se ha producido frente a las alzas de los planes de las Isapres -donde las estadísticas de la Corporación Administrativa del Poder Judicial señalan que ingresaron 47 mil recursos de protección por usuarios en su contra entre enero y julio de 2014-, los cuales en general son acogidos por las Cortes, hablan de una situación extendida de prácticas contrarias a la ley por parte de las prestadoras de salud, donde lo razonable sería una legislación o regulación que ofrezca una solución a la generalidad de los casos. Ante su ausencia, sin embargo, el Poder Judicial responde resolviendo cada caso individualmente (pues no está en sus atribuciones hacerlo de otra manera).

Semejante situación se ha podido apreciar también en lo que tiene que ver con la paralización de grandes proyectos mineros o energéticos debido a resoluciones judiciales. De hecho, más de una vez el empresariado ha reclamado sobre la “judicialización” de los proyectos. Sin embargo, la que parece ser la tónica es que estos proyectos, a pesar de contar con el apoyo del gobierno, chocan con los intereses de las comunidades afectadas, quienes recurren a tribunales para defender sus derechos, y éstos han fallado reiteradamente resguardando dichos derechos. La tensión que se ha vivido en las últimas décadas entre el interés del empresariado de impulsar proyectos a toda costa, y diversas comunidades y organizaciones que se les enfrentan es evidente, pero ante la cerrazón de la política a convertirse en espacio de mediación de intereses, los tribunales deben resolver individualmente caso a caso. Mismo desacople se vio en enero pasado cuando la Corte Suprema sentenció la prohibición del reemplazo en la huelga legal, mientras el gobierno presentaba un proyecto de ley bastante menos comprometido con los intereses de los trabajadores sobre este mismo tema.

En consecuencia, parece prudente afirmar que el Poder Judicial es el poder del Estado menos sujeto a la colonización de los intereses empresariales. Sobre las causas de esta “impermeabilidad”, al menos se pueden señalar como posibles su sistema autogenerativo, que lo aísla del control democrático, pero también de la necesidad de financiar elecciones;

un proceso de distanciamiento en el carácter social entre la élite económica neoliberal y quienes ostentan los cargos de más alto rango entre la judicatura; y cierto *ethos* de servicio público que sigue presente en la formación y desarrollo profesional de los jueces.

## **VI. INCIERTO COMIENZO DE AÑO**

Los meses recientes han profundizado una situación de vacío político, caracterizado por el destape de diversos escándalos que vinculan al poder económico con el político, los que terminan enlodando con creces los intentos del gobierno -manotazos de ahogado- por retomar el control de la agenda durante enero. Esta crisis puntual se enmarca en un cuadro general de deslegitimación de la política, sus instituciones, partidos y discurso, en definitiva, de la posibilidad de presentarse como representación de la sociedad y sus intereses mayoritarios. La subordinación de la política al poder económico -que en estos cuadernos hemos llamado “colonización empresarial de la política”<sup>8</sup>- es transversal y afecta a todo el espectro político tradicional. Así, los diversos partidos, lejos de representar visiones de la sociedad o corrientes ideológicas, aparecen como correas de transmisión de los diversos intereses empresariales: Penta en el caso de la UDI, pero también al ahora independiente Andrés Velasco; y el Grupo Luksic en el caso de la Concertación. La información que se conoce en relación a los aportes reservados levantan la sospecha más allá incluso de los partidos tradicionales, quedando aún pendiente saber la procedencia de los \$239.873.3709 en aportes reservados que recibió el candidato del PRO Marco Enríquez-Ominami en la última elección presidencial, con independencia de si sean estos irregulares o no.

En este contexto, comienzan a aparecer intentos de restauración espurios, o al menos para salir del impasse. Desde un intento autoritario por restablecer los términos de la política de la transición, con el llamado a una comisión de expertos por parte de la Presidenta Bachelet; la continua demanda de un “gran acuerdo nacional” por parte de la derecha y la Nueva Mayoría; los intentos de reformas controladas que no afecten los pilares sociales e ideológicos del Estado subsidiario, como la cooptación de la demanda por asamblea constituyente por parte de sectores progresistas de la Concertación, nuevos referentes políticos e incluso una figura prominente como Ricardo Lagos; hasta concluir en el riesgo latente de figuras demagógicas que, con oportunismo político, signifiquen una regresión autoritaria liderada por un líder carismático, como en los casos de Manuel José Ossandón y Franco Parisi, que vuelve a aparecer en marzo con un vídeo dando su propia interpretación mesiánica de la crisis política.

Los actores sociales, a diferencia de la política, sufren de forma indefectible el receso de sus actividades propio de los meses de verano. Sin embargo, los movimientos internos de organizaciones como la CUT, el Colegio de Profesores, fuerzas estudiantiles y nuevos movimientos sociales, llaman a estar atentos a la manera en que impacte en la sociedad este vacío político, y la expresión que desde las organizaciones sociales y actores de la sociedad civil pueda emerger en un país que poco a poco comienza a ganar experiencia en la acción pública de actores por fuera del espectro tradicional.

---

8 Boccoardo, G. y Romero, N. (2014, agosto). La nueva política de los acuerdos: El Ejecutivo y el empresariado. *Cuadernos de Coyuntura*, (4), pp. 4-13.

9 Ver Servel. (2014). Planillas de ingresos candidatos. Elecciones presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales 2013. Servel. Recuperado de: <http://www.servel.cl/ss/site/documentos.html>

Es difícil anticipar la dirección que tomará la política ante un vacío que tiende a desperdigar los esfuerzos, incentivar los oportunismos, erosionar las lealtades y desquiciar a quienes desde afuera intentan leer lo que ocurre. Sería un error por lo demás creer que la crisis está exclusivamente relacionada con los casos Penta, Caval-Dávalos o SQM y que, conteniendo estos, el sistema político mostraría síntomas de mejora. La deslegitimidad de los partidos, el Congreso, La Moneda, ministros, etc., ha sido un proceso extendido y sostenido en el tiempo, contenido por estrategias que en definitiva sólo verifican la debilidad de la política -como la confianza en la popularidad de Bachelet- y, por tanto, las soluciones o vías de salida para ser exitosas, criterio por lo demás parcial y partisano, deberán estar a la altura de las circunstancias ▼

## SUSCRIPCIONES:

PARA RECIBIR CADA EDICIÓN DE LOS CUADERNOS DE COYUNTURA EN TU DOMICILIO, CONTAMOS CON UNA MODALIDAD DE DONACIONES Y SUSCRIPCIÓN.

### ► ¿CÓMO PUEDES APOYARNOS?

1. Comprometiéndote con un aporte mensual de 5.000, 10.000, 15.000 pesos o una cifra mayor en la medida de tus posibilidades.
2. A todos quienes hagan un aporte mensual de 5.000 pesos o más se les enviará a su domicilio cada versión de los Cuadernos de Coyuntura que editamos bimestralmente.
3. Puedes elegir la modalidad de pago entre hacer un depósito bancario o una transferencia electrónica mensual a la Cuenta Corriente de Fundación Nodo XXI.



### ► ¿QUÉ DATOS NECESITAS PARA HACER TU DEPÓSITO?

- Fundación Nodo XXI - RUT: 65.065.819-1
- Cuenta Corriente N°:  
008000240709 - Banco de Chile
- Correo de confirmación:  
suscripciones@nodoxxi.cl

### ► ¿A QUÉ DESTINAMOS LAS DONACIONES?

- A la elaboración y difusión de material de estudio sobre problemáticas políticas, sociales, económicas y culturales, con una perspectiva de derechos y un enfoque que destaca por su originalidad y compromiso con el cambio social.
- A la organización de actividades de formación de masas críticas a través del debate, la deliberación y construcción de miradas colectivas, especialmente en conjunto con organizaciones y movimientos sociales de relevancia nacional.
- A la elaboración y socialización de propuestas y opiniones relevantes para la apropiación crítica de nuestra realidad, a través de material para medios de comunicación, redes sociales, columnas de opinión y campañas.